**SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA
ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE OAXACA**

RECURSO DE REVISIÓN: 0738/2017

**EXPEDIENTE: 0328/2016 CUARTA SALA
UNITARIA DE PRIMERA INSTANCIA**

**PONENTE: MAGISTRADA MARÍA ELENA VILLA
DE JARQUÍN.**

**OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA, CATORCE DE NOVIEMBRE DE
DOS MIL DIECIOCHO.**

Por recibido el Cuaderno de Revisión **0738/2017**, que remite la Secretaría General de Acuerdos, con motivo del recurso de revisión interpuesto por *********, en contra de la resolución de once de julio de dos mil diecisiete, dictada en el expediente **328/2016** por la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia, relativo al juicio de nulidad promovido por el **RECORRENTE** en contra de la **DIRECTORA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE OAXACA**, por lo que con fundamento en los artículos 207 y 208 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, vigente hasta el veinte de octubre de dos mil diecisiete, se admite. En consecuencia, se procede a dictar resolución en los siguientes términos:

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Inconforme con la resolución de once de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia de este Tribunal, *********, interpuso en su contra recurso de revisión.

SEGUNDO. Los puntos resolutivos de la resolución recurrida son los siguientes:

“PRIMERO.- Esta Sala fue competente para conocer y resolver del recurso de queja.- - - - -

SEGUNDO.- Se declara IMPROCEDENTE LA QUEJA** interpuesta por ******, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta resolución.- - - - -*

TERCERO.- Una vez que cause estado la presente resolución se ordena dar de baja del libro de control de expedientes que

lleve esta Sala Unitaria y archivar el presente como total y definitivamente concluido.-----

CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE ACTORA Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES DEMANDADAS, con fundamento en los artículos 142 fracción I y 143 fracciones I y II, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.-----”

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Sala Superior es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 114 QUÁTER, Párrafo Tercero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, Cuarto y Décimo Transitorios del Decreto número 786 de la Sexagésima Tercera Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, publicado en el Extra del Periódico Oficial del Gobierno del Estado el dieciséis de enero de dos mil dieciocho, así como los diversos 86, 88, 92, 93, fracción I, 94, 201, 206 y 208, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, vigente hasta el veinte de octubre de dos mil diecisiete, dado que se trata de un Recurso de Revisión interpuesto en contra de la resolución de once de julio de dos mil diecisiete, dictada por la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia de este Tribunal, dentro del expediente **0328/2016**.

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

SEGUNDO. Los agravios hechos valer se encuentran expuestos en el escrito respectivo del recurrente, por lo que no existe necesidad de transcribirlos, al no transgredírsele derecho alguno, como tampoco se vulnera disposición expresa que imponga tal obligación.

TERCERO. Previo a la emisión de la resolución del presente asunto se puntualiza, que la resolución que se controvierte es la relativa a aquella que resolvió el recurso de queja interpuesto por el hoy disconforme, en contra del cumplimiento de la sentencia definitiva; el cual en términos del artículo 206 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca¹, vigente hasta el veinte de octubre de dos

¹ “**Artículo 206.-** Contra los acuerdos y resoluciones dictados por las salas unitarias de primera instancia, procede el recurso de revisión, cuyo conocimiento y resolución corresponde a la Sala Superior.

Podrán ser impugnadas por las partes, mediante recurso de revisión:

- I.- Los acuerdos que admitan o desechen la demanda, su contestación o ampliación;
- II.- El acuerdo que deseche pruebas;
- III.- El acuerdo que rechace la intervención del tercero;
- IV.- Los acuerdos que decreten, nieguen o revoquen la suspensión;
- V.- Las resoluciones que decidan incidentes;

mil diecisiete, es improcedente; sin embargo, dado que en el TERCER punto resolutivo de la resolución en comento el magistrado de la primera instancia resolvió, que *“Una vez que cause estado la presente resolución se ordena dar de baja del libro de control de expedientes que lleve esta Sala Unitaria y archivar el presente asunto como total y definitivamente concluido.”*; entonces, con esta determinación, la sala de origen ha puesto fin al procedimiento de ejecución de sentencia; de ahí que, se admita a trámite el presente recurso de revisión, ello en términos de lo estatuido por la fracción VIII del artículo 206 fracción VIII, de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.

En sus motivos de inconformidad alega que le causa agravio la errada decisión de la primera instancia de tener al Secretario de Vialidad y Transporte del Estado, cumpliendo con la sentencia pronunciada en el juicio natural y por ende declarando improcedente la queja, porque se contraviene lo dispuesto por la fracción II del artículo 177 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, dice, al no fundar y motivar su resolución, porque afirma que sin realizar un análisis puntual y jurídico del cumplimiento de la sentencia, admite indebidamente el contenido del artículo 40 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado y del Acuerdo publicado en el Extra del Periódico Oficial del Estado de 22 veintidós de agosto de dos mil doce, en el que se reforma el artículo 95 Bis de la Ley de Tránsito Reformada, como fundamentos de la competencia del Secretario de Vialidad y Transporte del Estado, para resolver lo relativo a la renovación de su acuerdo de concesión.

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

Afirma, que contrario a lo resuelto por la primera instancia el Secretario de Vialidad y Transporte, no es autoridad competente para dictar la resolución en el sentido de que no ha lugar a otorgar la renovación de su acuerdo de concesión, porque ninguna norma lo faculta para hacer tales actos, y sostiene que ello se desprende de la lectura que se haga del artículo 40 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado. (Lo transcribe)

VI.- Las resoluciones que decreten o nieguen el sobreseimiento;
VII.- Las sentencias que decidan la cuestión planteada. Por violaciones cometidas durante el procedimiento del juicio, cuando hayan dejado sin defensa al recurrente y trasciendan al sentido de la sentencia; y
VIII.- Las resoluciones que pongan fin al procedimiento de ejecución de la sentencia”

Explica, que con base en dicho precepto jurídico el Secretario de Vialidad y Transporte, sólo tiene facultades para conocer, iniciar e instruir los trámites para otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar, prorrogar, renovar, aprobar y dar por terminadas las concesiones, permisos y autorizaciones, las cuales finalmente otorgará el Titular del Poder Ejecutivo. Agrega que conforme al citado precepto legal, el comentado Secretario tiene facultades para iniciar los procedimientos administrativos, conocer de los mismos e instruirlos, es decir, de realizar todas y cada una de las etapas del procedimiento cuidando que se respeten las formalidades y términos legales y se cumplan los requisitos establecidos, pero que no le otorga facultades para resolver el fondo de los citados procedimientos. También dice, que el comentado artículo 40 fracción IV, no confiere al Secretario de mérito a resolver de fondo lo relativo al otorgamiento, revocación, cancelación, suspensión, modificación, prórroga, renovación, aprobación y terminación de las concesiones, debido a que sólo tiene facultad para instruir tales procedimientos y colocarlos en estado de resolución.

Como parte de sus inconformidades alude a un concepto del vocablo instruir, dice, otorgado por la Real Academia de la Lengua Española, y afirma que dicho concepto se adecua exactamente a la naturaleza jurídica del procedimiento, en el cual la doctrina y la jurisprudencia han coincidido en indicar que existen etapas perfectamente diferenciadas, a saber: a) la de instrucción que abarca todos los actos procesales y b) la de conclusión o resolución. Que la instrucción a su vez, contiene tres etapas: 1. postulatoria o expositiva, b. probatoria y c. preconclusiva. De todo esto, insiste en que el Secretario de Vialidad y Transporte, tiene facultad para atender cuestiones substanciales o incidentales relacionadas con la renovación de la concesión, pero no para resolver si esta debe otorgarse o no, que el numeral 40 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado sí faculta al Secretario para intervenir en todas las etapas relacionadas con la instrucción, pero no llega hasta el punto de facultarle para resolver o concluir el procedimiento de renovación de concesión.

Debido a todo esto, sostienen, es que existe un yerro en la decisión de la primera instancia en la que se decretó la competencia del Secretario de Vialidad y Transporte, por lo que dice, debe revocarse la resolución alzada y requerir al citado Secretario para que

de cabal cumplimiento a la sentencia de mérito, esto debido a que conforme a las constancias judiciales se puede apreciar que ha transcurrido en exceso el tiempo para el cumplimiento de la sentencia definitiva en detrimento del aquí disconforme. Como sustento de estos argumentos cita los criterios de rubro: *“JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. DEL PROMOVIDO ANTE LAS SALAS REGIONALES DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA CONTRA RESOLUCIONES DEFINITIVAS, ACTOS ADMINISTRATIVOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE FUNDEN EN UN TRATADO O ACUERDO INTERNACIONAL PARA AVITAR LA DOBLE TRIBUTACIÓN, O EN MATERIA COMERCIAL, SUSCRITO POR MÉXICO, O CUANDO EL DEMANDANTE ADUZCA LA FALTA DE APLICACIÓN DE ALGUNO DE ÉSTOS EN SU FAVOR, DEBE SER RESUELTO POR LAS SECCIONES DE LA SALA SUPERIOR DE DICHO ÓRGANO”* y *“SERVIDORES PÚBLICOS. EL LEGISLADOR EMPLEÓ COMO SINÓNIMOS LAS PALABRAS “INSTAURAR” Y “SUSTANCIAR” EN EL TEXTO DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN IV, INCISO A) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO VIGENTE HASTA EL 16 DE JULIO DE 2001”*.

Datos personales protegidos por el Art. 116 de la LGTAIP y el Art. 56 de la LTAIPEO

Más adelante, refiere que la resolución alzada carece de fundamentación y motivación y que con ello se contraviene lo dispuesto por el artículo 177 fracción II de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, porque no se establece de manera puntual e inequívoca las normas jurídicas y los razonamientos jurídicos que sustenten el Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial del Estado el 4 cuatro de septiembre de 2012 dos mil doce, en el que se otorgue al Secretario de Vialidad y Transporte la facultad para resolver respecto a su solicitud de renovación de concesión.

Repite, que la sala de origen incurre en un error al determinar que el Secretario de Vialidad y Transporte, es autoridad competente para dictar resolución en el sentido de no haber lugar a otorgarle la renovación de su concesión. Y, en este punto, refiere que el citado Secretario pretende fundar su competencia en un Acuerdo Delegatorio publicado en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de 4 cuatro de septiembre de 2012 dos mil doce, expedido por el Gobernador del Estado y el cual ha sido derogado por la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca y por la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca. Que el Acuerdo delegatorio no reforma el artículo 95 bis de la Ley de Transporte del Estado (lo transcribe), que ésta última ley fue promulgada el 12 doce de noviembre de 2013 dos mil trece e inició su

vigencia el 10 diez de marzo de 2014 dos mil catorce, conforme al artículo primer transitorio.

Además que la Ley de Transporte del Estado en los artículos 72 último párrafo y 120 fracción III prevén la figura de la prórroga o renovación de las concesiones de transporte público, estableciendo en el artículo 12 fracción V de la citada Ley, que es atribución del Gobernador del Estado expedir el acuerdo de prórroga o renovación de concesión, esto porque señala que es una atribución del Jefe del Ejecutivo Local expedir acuerdos, decretos y demás disposiciones administrativas necesarias para la actualización y regulación del servicio público de transporte. Y, como soporte de estos argumentos transcribe el artículo 12, fracción V de la referida Ley. De esta manera, asegura, que como la Ley de Transporte indica, que es facultad del Gobernador conocer y resolver sobre renovación o prórroga de las concesiones de transporte público, entonces se deroga cualquier disposición igual o de menor rango que establezca algo distinto, opuesto o contradictorio, como sucede con el Acuerdo Delegatorio en comento. Así sostiene que el Acuerdo Delegatorio de 4 cuatro de septiembre de 2012 dos mil doce, ha sido derogado por disposición expresa del segundo párrafo del segundo artículo transitorio de la Ley de Transporte para el Estado de Oaxaca, en virtud de ser una disposición administrativa de menor rango que la ley y además contener disposiciones opuestas al artículo 12 fracción V en relación con los diversos 72 último párrafo y 120 fracción III de la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, de ahí que no pueda ser invocado como sustento del fundamento de la competencia del Secretario de Vialidad y Transporte para resolver sobre la renovación de las concesiones.

Señala que el Acuerdo Delegatorio de 4 cuatro de septiembre de 2012 dos mil doce ha dejado de tener vigencia y por ende es inaplicable como fundamento de la autoridad de transporte. También repite que conforme a la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca vigente desde el 12 doce de abril de 2016 dos mil dieciséis en tanto no se expida el Reglamento de la referida ley, continuará en lo que no se oponga el Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada. Por lo que, el artículo 95 bis del Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada, ha sido derogado por los artículos segundo, séptimo y octavo transitorios al oponerse al contenido del artículo 13 fracción III de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de

Oaxaca, el cual señala que son atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo, las demás que le confiera la ley, como por ejemplo las contenidas en el artículo 12 fracción V de la Ley de Transporte, las relacionadas a expedir acuerdos, decretos y demás disposiciones administrativas necesarias para la actualización y regulación del servicio público de transporte, dentro de las que se encuentra, claramente, la renovación o prórroga de las concesiones de transporte público.

También indica en sus inconformidades que le agravia la resolución alzada porque existe confusión en los puntos controvertidos y por ende, la sala de origen llega a conclusiones erróneas e ilegales, por lo que se contraviene lo estatuido en el artículo 177 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, el cual obliga a que las sentencias contengan una fijación clara y precisa de los puntos controvertidos.

Esto porque dice que en el recurso de queja intentado es relativo a la falta de cumplimiento por parte de la autoridad demandada, dice, Secretario de Vialidad y Transporte, respecto de la sentencia de fondo, la cual versó sobre la nulidad del oficio SEVITRA/DC/DCR/372/2013 emitido por la Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte, para efecto de que la autoridad demandada dictara otro acto debidamente fundado y motivado en cuanto a las facultades que dice tener para hacerlo, lo que, sostiene, conlleva a que la autoridad competente, que dice es el Gobernador del Estado, sea quien resuelva sobre su petición de renovación de concesión.

Señala que en concreto, su petición está dirigida a la autoridad administrativa para obtener la renovación de su concesión de transporte público, sin embargo, continúa, la primera instancia, al resolver la queja interpuesta por incumplimiento de la sentencia, determinó, que la resolución del Secretario de Vialidad y Transporte, en cumplimiento a la ejecutoria de fondo está debidamente fundada y motivada, de donde se evidencia la falta de congruencia entre lo solicitado por el administrado y lo resuelto por la juzgadora.

Finaliza sus inconformidades indicando que la resolución en análisis carece de fundamentación y motivación y por tanto, que se vulnera lo dispuesto por el artículo 177 fracción II de la Ley de Justicia

Administrativa para el Estado de Oaxaca y al efecto, transcribe la parte de la resolución que estima le agravia. Continúa diciendo que la sala de origen no señala los preceptos legales en que base su decisión de considerar que es correcto que la autoridad demandada declare que no es procedente conceder la concesión a la parte actora, además que tampoco expresa los razonamientos lógico jurídicos que concreten individualización y particularicen normas generales abstractas e impersonales, dado que se limita a citar los artículos 40 fracciones I, II, III, IV, IX, XXI, tercero y noveno transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, 5, 6, 21, 26, 29, 35, 44, 66, 68, 78 y 87 de la Ley de Transporte del Estado, 95 bis de la Ley de Tránsito Reformada para el Estado, 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 13 de la Constitución Local. (Los transcribe)

Añade que la resolutora primigenia es omisa en señalar los artículos transitorios a que se refiere cuando la Ley Orgánica tiene varios capítulos transitorios como reformas ha sufrido, pero que sí se refirió a los transitorios del decreto de 29 veintinueve de noviembre de 2010 dos mil diez y que hubiera advertido que no cuenta con nueve transitorios. Para abundar en sus manifestaciones, transcribe los citados preceptos legales, así como el arábigo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca.

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAPEO

Concluyendo que, ninguno de tales preceptos normativos es puntualmente aplicable al caso, en principio porque no está solicitando la expedición de una concesión de transporte público, porque lo que está solicitando en el juicio natural y repercute en la ejecución de la sentencia es la renovación de su acuerdo de concesión que ya le fue expedida y de otra parte, porque como afirma que ya lo argumentó, el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado es incompetente para resolver sobre su petición de renovación de concesión de transporte público.

En relación con los anteriores sintetizados agravios, es pertinente indicar lo siguiente:

El recurso de Queja interpuesto, conforme a lo previsto por el artículo 202 fracción II, párrafo segundo de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca², vigente hasta el veinte de

² "Artículo 202.-

octubre de dos mil diecisiete, puede interponerse en contra de los actos de las autoridades demandadas por repetición del acto o resolución anulada o bien por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada. Además, exige que en el escrito de interposición del recurso de queja, se expresen las razones por las que se considere que existe repetición del acto o resolución anulada, o bien que existe exceso o defecto en la ejecución de la sentencia.

Lo anterior, para precisar el objetivo del recurso de queja. Es decir, en el recurso de queja quien lo interpone, debe hacerlo al considerar que se ha repetido el acto o resolución anulada o bien, porque estime que existe un exceso o defecto en la ejecución de la sentencia y, para tal efecto, debe expresar las razones del porqué estima que se incurre en uno u otro supuesto. Por su parte, la resolutoria debe analizar si los argumentos expuestos por el recurrente se actualizan, o sea debe verificar si en el caso existe una repetición del acto o resolución anulada o bien, si existe un exceso o defecto en la ejecución de la sentencia.

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

Se acota lo anterior, porque en el actual caso, el recurrente afirma que en la resolución del recurso de queja la juzgadora incurre en ilegalidad pues declaró improcedente la queja, estimó cumplida la sentencia por las consideraciones que anotó y decretó el final del procedimiento de ejecución de sentencia ordenando la terminación del expediente como asunto total y definitivamente concluido y la baja de su libro de registro.

Entonces, esta Sala Superior debe analizar si en efecto las cosas se actualizan de esa manera para dar una solución legal.

De las constancias que integran los autos del juicio remitidos para la solución del presente asunto y que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 173 fracción I de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, vigente al inicio del juicio principal, por tratarse de actuaciones judiciales, se destaca lo siguiente:

.... II. Contra los actos de las mismas autoridades, por repetición del acto o resolución anulada o por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada.

En el escrito se expresarán las razones por las que se consideren que existe repetición del acto o resolución anulada, o que existe exceso o defecto en la ejecución de la sentencia.”

a) Sentencia de veintiuno de enero de dos mil catorce, en la que en la parte que interesa, el juzgador primigenio resolvió: *“Del análisis al reseñado oficio se advierte que la **Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado**, no citó fundamento alguno de la facultad que dice tener para dar respuesta a las peticiones formuladas al Secretario de Vialidad y Transporte del Estado, lo que dejó al aquí actor en estado de indefensión, incumpliendo la demandada con la obligación que tiene de precisar el o los preceptos legales que la faculden para dictar el oficio que aquí se impugno; tiene aplicación la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada con el registro 177347 en la página 310 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Septiembre de 2005, Materia Administrativa, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: ‘COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. EL MANDAMIENTO ESCRITO QUE CONTIENE EL ACTO DE MOLESTIA A PARTICULARES DEBE FUNDARSE EN EL PRECEPTO LEGAL QUE LES OTORGUE LA ATRIBUCIÓN EJERCIDA, CITANDO EL APARTADO, FRACCIÓN, INCISO O SUBINCISO, Y EN CASO DE QUE NO LOS CONTENGA, SI SE TRATA DE UNA NORMA COMPLEJA, HABRÁ DE TRANSCRIBIRSE LA PARTE CORRESPONDIENTE...’* Por lo anterior, los argumentos que adujo la demandada en su escrito de contestación respecto de la fundamentación en la competencia; precisando dónde se encuentra publicado el acuerdo que refirió en el acto que se impugnó, resultan irrelevantes debido a que la fundamentación del actuar de la autoridad debió **constar en el propio documento** a efecto de no dejar inaudito al administrado y preparar su debida defensa; con fundamento en el artículo 7 fracción V en relación con la fracción I, de la Ley que rige a este tribunal; por ello resulta ilegal el acto que fue materia de la litis. En consecuencia al resultar ilegal el acuerdo contenido en el oficio **SEVITRA/DJ/DCAA/372/2013**, de 12 doce de abril de 2013 dos mil trece, se declara su **NULIDAD PARA EL EFECTO** de que la **Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado**, dicte otro debidamente **fundado y motivado** en cuanto a sus facultades que dice tener para hacerlo. Ahora tomando en consideración que **el oficio impugnado proviene de una solicitud de petición para la renovación de una concesión de transporte de pasajeros (taxi)**, es aplicable...” (Folios 102);

b) Proveído de 26 veintiséis de febrero de 2014 dos mil catorce, en el que se decretó ejecutoriada la sentencia y se inició el procedimiento de ejecución de sentencia. (Folio 115);

c) Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/1195/2014 de la Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad Transporte, con el cual manifiesta dar cumplimiento a la sentencia descrita en el inciso a). (Folio 139);

d) Proveído de 23 veintitrés de junio de 2014 dos mil catorce, mediante el cual se tiene por cumplida la sentencia. (Folio 151)

e) Resolución de 01 de octubre de 2014 dos mil catorce, emitida por la Sala Superior, en la que resolvió recurso de revisión interpuesto en contra del acuerdo citado en el inciso anterior; mediante el cual determinó no tener por cumplida la sentencia, al considerar que *“la demandada es omisa en exponer las razones, causas particulares e inmediatas, o bien los motivos por los que estima que tales preceptos legales le facultan para emitir actos como el impugnado, además que no adecua los dispositivos normativos en comentario al caso en específico.”*, ordenando revocar el acuerdo indicado. (Fojas 162 a 166):

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

f) Proveído de 28 veintiocho de octubre de 2014 dos mil catorce, mediante el cual en atención a la resolución precisada, inicia nuevamente procedimiento de ejecución de sentencia. (Foja 168);

g) Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/2980/2014 de la Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con el que dice dar cumplimiento a la resolución de sala superior; y adjunta el oficio SEVITRA/DJ/DCAA/2979/2014 que dice recayó al cumplimiento de la resolución. (Folios 172 y 174);

h). Acuerdo de 15 quince de diciembre de 2014 dos mil catorce, con el que no se tiene por cumplido el fallo, requiriéndose nuevamente el cumplimiento a la demandada en diversas ocasiones. (Folio 188);

i) Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/976/2015 del Director de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con el que dice dar cumplimiento a la sentencia; y adjunta el oficio SEVITRA/DJ/DCAA/945/2015 que dice recayó al cumplimiento de la resolución. (Folios 198 a 201);

j). Proveído de 02 dos de julio de 2015 dos mil quince, con el que la primera instancia admite la personalidad de la demandada y da vista a la parte actora del oficio detallado anteriormente. (Folio 210)

k) Escrito presentado en la Oficialía de Partes Común del Tribunal el 19 diecinueve de agosto de 2015 dos mil quince, con el que el aquí disconforme contesta la vista apuntada en el inciso anterior y en el que manifiesta que no está conforme con el cumplimiento de la sentencia de mérito, al considerar que el Director de Concesiones no es autoridad competente para resolver su petición. (Folios 213 y 214);

l) Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/3953/2016 signado por el Director de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte, con el que adjunta acuerdo de 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis. (Folio 233);

m) Oficio SEVITRA/DJ/DCAA/3957/2016 del Secretario de Vialidad y Transporte, mediante el cual remite de 30 treinta de noviembre 2016 dos mil dieciséis, y en la que resuelve la petición de la parte actora respecto a la renovación de su acuerdo de concesión. (Folios 236 a 238)

n) Proveído de 08 ocho de septiembre mediante el cual nuevamente se tiene por cumplida la sentencia

o) Resolución de 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis mediante la cual la sala superior resolvió que en efecto el Director de Concesiones no es competente para resolver la petición de la parte actora e indicó que era competente para tal efecto el Secretario de Vialidad y Transporte.(folio 256 a 261)

p). Auto de 26 veintiséis de enero de 2017 dos mil diecisiete, en el que la primera instancia da vista a la parte actora respecto al oficio enunciado en el inciso anterior para que se manifieste respecto al cumplimiento de la sentencia definitiva. (Folio 263);

q) Escrito presentado en la Oficialía de Partes Común del Tribunal el 16 dieciséis de febrero de 2017 dos mil diecisiete, con el que el actor del juicio natural interpone RECURSO DE QUEJA por defecto en el cumplimiento de la ejecución de sentencia, pues en síntesis, indica que ésta debe ser cumplida por autoridad competente y

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

afirmando que el Secretario de Vialidad y Transporte, no es la autoridad competente para resolver lo relativo al otorgamiento de la renovación de su acuerdo de concesión. (Folios 273 a 280); y

r) Resolución de 11 once de julio de 2017 dos mil diecisiete, hoy impugnada, y en la que decretó improcedente la queja interpuesta al estimar que el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado sí es competente para resolver la petición del actor y al considerar que la resolución de 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, del referido Secretario está debidamente fundada y motivada porque cumple con lo estatuido en el artículo 7 fracciones I y V de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca. (Folios 324 a 327).

Así de los autos se tiene la sentencia definitiva de 21 veintiuno de enero de 2014 dos mil catorce, en la que la primera instancia resolvió;

“... NULIDAD PARA EL EFECTO que la Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado, dicte otro debidamente *fundado y motivado* en cuanto sus facultades que dice tener para hacerlo”; esto porque el sentido en que se emitió la sentencia es únicamente para efecto de que la autoridad que resultó demandada, es decir, la **Directora de Concesiones de la Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado** emita una nueva resolución en la que funde y motive debidamente su competencia.

Luego, mediante resolución de 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, en la que Sala Superior resolvió;

“... la autoridad facultada para atender la señalada petición de renovación de concesión, lo es la Secretaria de Vialidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, el 4 cuatro de septiembre de 2012 dos mil doce, mediante el cual se delegaron facultades al Secretario de Vialidad y Transporte, para que en el ejercicio de sus atribuciones, ejecute las disposiciones señaladas en el artículo 95 bis del Reglamento de la Ley de Transito Reformada en el Estado de Oaxaca...”

Conforme a esta transcripción, se tienen que la primera instancia considero decretar la nulidad del acto impugnado imprimiéndole un efecto, consistente en que la autoridad demandada, director de Concesiones de la Secretaria de Vialidad y Transporte, emita un nuevo acto **debidamente fundado y motivado en cuanto a la competencia de que dice tener.**

Por su parte, la Sala Superior decreto que el Director de Concesiones es incompetente para resolver la petición de la parte actora y simultáneamente resolvió que quien tiene competencia para ello es el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca. Por lo anterior, se debe analizar, si se han cumplido tales determinaciones para poder tener por cumplida la sentencia que rige el fondo del asunto.

Con el oficio remitido por el Director Jurídico de la Secretaría de Vialidad y Transporte se acompañó el acuerdo de 24 veinticuatro de mayo de 2016 dos mil dieciséis del Director de Concesiones en el que con fundamento en el artículo 2 de la Constitución Local, conforme al cual las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les autoriza y deben hacer lo que la ley les ordena, estima que carece de competencia para continuar con el trámite de la petición de la parte actora.

Por otro lado, con la resolución del 27 veintisiete de octubre de 2017 dos mil diecisiete el Secretario de Vialidad y Transporte resolvió la petición de la parte actora fundamentándose para ello en los preceptos legales que invoca; tomando en consideración, **SE REPETE**, que la Sala Superior ya resolvió que dicho servidor público es el competente para resolver la petición de la parte actora, entonces, se reitera que la demandada, Directora de Concesiones y la autoridad vinculada por la Sala Superior, Secretario de Vialidad y Transporte ha cumplido con el fallo que rige la sentencia.

A todo esto, con el objetivo de dar cumplimiento a la exigencia constitucional de impartición de justicia completa, tutelada en el artículo 17 constitucional, sin perjuicio de reiterar lo ya pronunciado por la Sala Superior en la resolución 27 veintisiete de octubre de 2016 dos mil dieciséis, se procede a pronunciarse sobre la competencia del Secretario de Vialidad y Transporte del Estado de Oaxaca de acuerdo a los preceptos legales señalados como base de su competente para resolver la petición de ***** es necesario verificar si los preceptos

legales señalados, le conceden facultades al servidor público en cuestión, para ello se transcriben los artículos plasmados, los siguientes:

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca;

“Artículo 40.- A la Secretaría de Vialidad y Transporte le corresponde el despacho de los siguientes asuntos:

I.- Regular y controlar la prestación de los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el territorio del Estado de Oaxaca, en todas sus modalidades, así como el equipamiento auxiliar de transporte, sea cualesquiera el tipo de vehículos y sus sistemas de propulsión, a fin de que de manera regular, permanente, continua, uniforme e ininterrumpida se satisfagan las necesidades de la población;

II.- Proponer al Gobernador del Estado las políticas, normatividad y programas relativos a vialidad y transporte en la entidad;

III.- Promover y vigilar que los servicios de transporte de pasajeros y de carga en el Estado de Oaxaca, se efectúen con apego a la Ley de la materia; (...)

IV.- Conocer, iniciar e instruir los trámites para otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar, prorrogar, renovar, aprobar y dar por terminadas, según corresponda, las concesiones, permisos y autorizaciones, que otorgue el titular del Ejecutivo, en términos de la Ley de la materia, para la explotación del servicio público de transporte en el Estado de acuerdo a los términos legales y requisitos establecidos en las propias concesiones o permisos otorgados; (...)

VII.- Aplicar las sanciones previstas en las disposiciones legales y reglamentarias en la materia de su competencia y dar seguimiento a la aplicación de las que correspondan a otras autoridades, así como, resolver los recursos de quejas que le presenten, de conformidad con las disposiciones legales correspondientes; (...)

IX. Expedir tarjetas de circulación de transporte público y particular. En los casos de los servicios del transporte público, revisar y, en su caso, autorizar la documentación del solicitante y de ser procedente entregar los documentos previstos en la Ley de la materia, tales como título de concesión, cesión de concesión, tarjetón de concesión, tarjeta de circulación, engomado alfanumérico y placas de circulación, entre otros; así como, autorizar y entregar los permisos, placas y tarjetas de circulación y engomado alfanumérico del transporte público, previstos en la ley de la materia, en coordinación con las instancias gubernamentales que se requieran; (...)

XI. Realizar a través de las normas legales necesarias la certificación de conductores en materia de transporte público y particular, garantizando el cumplimiento de los requisitos en materia de aptitudes físicas y psicológicas con lo dispuesto en las leyes vigentes; (...)

XXI. Regular, autorizar e inspeccionar la publicidad en el servicio de transporte, así como, imponer las sanciones en caso de incumplimiento de acuerdo con las normas jurídicas y administrativas correspondientes;

...

En cuanto al artículo 7 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece:

“Artículo 7.- Son elementos y requisitos de validez del acto administrativo: I. Ser expedido por órgano competente, a través de servidor público, y en caso de que dicho órgano fuere colegiado, reúna las formalidades de la ley o decreto en que se funde para emitirlo; II. Que el objeto materia del mismo, sea determinado o determinable; preciso en cuanto a las circunstancias de tiempo y lugar, y previsto por la ley; III. Cumplir con la finalidad de interés público, regulado por las normas en que se concreta, sin que puedan perseguirse otros fines distintos; IV. Constar por escrito y con la firma autógrafa de la autoridad que lo expida, salvo en aquellos casos en que la ley autorice otra forma de expedición; V. Estar fundado y motivado; VI. Ser expedido sujetándose a las disposiciones relativas al procedimiento administrativo previstas en esta Ley; VII. Ser expedido sin que medie error sobre el objeto, causa o motivo, o sobre el fin del acto; VIII. Ser expedido sin que medie dolo o violencia en su emisión; IX. Mencionar el órgano del cual emana; X. Ser expedido sin que medie error respecto a la referencia específica de identificación del expediente, documentos o nombre completo de las personas; XI. Ser expedido señalando lugar y fecha de emisión; XII. Tratándose de actos administrativos que deban notificarse, deberá hacerse mención de la oficina en donde se encuentra y pueda ser consultado el expediente respectivo; XIII. Tratándose de actos administrativos recurribles deberá hacerse mención de los recursos que procedan; XIV. Ser expedido mencionando expresamente todos los puntos propuestos por las partes o establecidos por la ley, y XV. Los demás requisitos y elementos específicos que exijan las leyes o reglamentos aplicables al acto.”

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

La Ley de Transporte del Estado de Oaxaca;

“ARTÍCULO 5.- Es obligación del Estado satisfacer las necesidades del servicio de transporte, que podrá prestarlo por sí o mediante el otorgamiento de concesiones y permisos a particulares en los casos, términos y condiciones que aseguren la eficacia de su prestación, en las modalidades que dicte el interés público, de conformidad con esta Ley.

Las personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas, así como mujeres embarazadas, tienen derechos preferenciales en su accesibilidad y trato en el transporte público.”

“ARTÍCULO 6.- En lo no previsto en la presente Ley, respecto de procedimientos administrativos, términos, notificaciones, pruebas, medios de impugnación y demás formalidades, se aplicarán supletoriamente en su orden, la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca y el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.”

“ARTÍCULO 21.- La prestación del servicio de transporte corresponde originalmente al Estado, quién podrá hacerlo en forma directa o a través de

concesiones y permisos otorgados a personas físicas o morales constituidas conforme a las Leyes del país.

Las concesiones para la prestación del servicio público de transporte serán otorgadas por el Gobernador del Estado, previo desahogo del procedimiento que establece la presente Ley y su Reglamento.

Para prestar el servicio especial de transporte se requiere de un permiso otorgado por la Secretaría, en los términos y condiciones que la presente Ley establece.”

“ARTÍCULO 26.- Los concesionarios que obtengan una concesión, deberán iniciar la prestación del servicio con vehículos cuyo modelo no exceda de cinco años a la fecha del otorgamiento de la concesión o permiso correspondiente.

No obstante lo dispuesto en el artículo que antecede, la Secretaría podrá autorizar el uso de vehículos por periodos de un año, siempre que de la revisión física y mecánica que se practique, se determine que se encuentran en condiciones para continuar prestando el servicio. El uso de un vehículo no podrá prorrogarse por más de tres periodos.”

“ARTÍCULO 27.- Los concesionarios del servicio de transporte deberán tener la propiedad o legítima posesión de los vehículos con que presten el servicio, y deberán cumplir con las especificaciones técnicas y de operación que determinen las normas técnicas con apego a lo que dispongan los Reglamentos respectivos.”

“ARTÍCULO 28.- La Secretaría establecerá el diseño y cromática de identificación y homologación de los vehículos del transporte, según la modalidad de servicio de que se trate. De igual forma aprobará los accesorios, aditamentos y distintivos que se requieran en la prestación de los servicios regulados por esta Ley, cuyo uso y observancia tendrán carácter de obligatorio para los concesionarios.”

“ARTÍCULO 29.- Los vehículos del servicio de transporte deberán contar con póliza de seguro vigente para proteger y asegurar la vida de sus usuarios y su carga, del conductor y de terceros, así como para responder por los daños que pudieran ocasionarse por accidentes ocurridos durante la prestación del servicio.”

“ARTÍCULO 35.- Quienes presten el servicio público de transporte quedan sujetos al cumplimiento de la presente Ley, su reglamento, así como de las normas técnicas y de operación que determine la Secretaría.”

“ARTÍCULO 44.- Atendiendo a las necesidades del servicio así como a las condiciones socioeconómicas de la región y de las vialidades, la Secretaría podrá autorizar el cambio de vehículos siempre que cumpla con las características y especificaciones técnicas y de seguridad que para esa modalidad de servicio señale el Reglamento de la presente Ley y las normas emitidas por la Secretaría.”

“ARTÍCULO 66.- Para prestar el servicio público de transporte, se requiere de una concesión otorgada por el Gobernador del Estado, conforme al procedimiento que señala esta Ley.

La concesión estará sujeta a su refrendo cada cinco años y en la fracción que reste en su vigencia, de conformidad con los periodos y condiciones que determine la Secretaría.

Las concesiones se otorgarán en favor de personas físicas o morales de nacionalidad mexicana, que acrediten contar con la capacidad legal, administrativa, técnica y financiera necesaria para proporcionar un servicio eficiente.”

“ARTÍCULO 68.- En los títulos de concesión se establecerán las condiciones, términos, limitaciones, áreas y rutas, en su caso con que deba prestarse el servicio, las cuales serán obligatorias para el concesionario.”

“ARTÍCULO 78.- No se podrá iniciar el procedimiento de otorgamiento de concesiones, si no es mediante el estudio técnico realizado por la Secretaría, para determinar la necesidad del servicio. No tendrán validez las concesiones otorgadas fuera del procedimiento previsto en esta Ley.

No se recibirán propuestas ni solicitudes de concesión, sino a partir de la convocatoria pública emitida por la Secretaría.

La presentación de propuestas y solicitudes no genera derecho o antecedente para el participante o solicitante para el otorgamiento de futuras concesiones.”

“ARTÍCULO 87.- Está prohibida la prestación del servicio público de transporte sin contar con la concesión o permiso correspondiente.”

Por su parte la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece:

“Artículo 8.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa pero en materia política solo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve termino al peticionario.”

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

La Constitución Política Libre y Soberano del Estado de Oaxaca:

ARTÍCULO 13.- Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que esta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar la respuesta al peticionario.

Conforme a los numerales transcritos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, se advierte las diversas facultades con que cuenta el Secretario de Vialidad y Transporte, en específico en el numeral 40 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, dispone que el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado está facultado para conocer, iniciar e instruir los trámites para otorgar, revocar, cancelar, suspender, modificar, prorrogar, renovar, aprobar y dar por terminadas, según corresponda, las concesiones, permisos y autorizaciones, que otorgue el titular del ejecutivo, en términos de la

Ley de la materia, para la explotación del servicio público de transporte en el estado de acuerdo a los términos legales y requisitos establecidos en las concesiones o permisos otorgados.

En cuanto a los preceptos normativos de la Ley de Transporte de Estado de Oaxaca refieren a las formalidades que deben cumplimentar las autoridades del Estado en materia de concesiones y a las formalidades que deben cumplir las personas que deseen adquirir una concesión, así como se permanencia.

Además de los preceptos antes invocados, también el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado señaló para sostener su facultad para dar respuesta a la solicitud de la recurrente, en el Acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 4 cuatro de septiembre de 2012 dos doce por el que se delegan facultades al Secretario de Vialidad y Transporte del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, en el que su artículo PRIMERO señala:

Datos personales protegidos por el Art. 116 de la LGTAIP y el Art. 56 de la LTAIPEO

“PRIMERO.- Se delegan facultades al Secretario de Vialidad y Transporte para que en el ejercicio de sus atribuciones, ejecute las disposiciones señaladas en el artículo 95 Bis del Reglamento de la Ley de Transito Reformada del Estado de Oaxaca.”

Por su parte, el artículo 95 Bis del citado Reglamento de la Ley de Tránsito, dispone:

“**ARTICULO 95 BIS.**- El tiempo por el que se otorgue una concesión podrá ser prorrogado por la Secretaría de Vialidad y Transporte, mediante la renovación de la concesión por un término máximo de cinco años, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto. La Secretaría de Vialidad y Transporte, podrá autorizar las cesiones de derechos y las trasferencias de derechos por fallecimiento de los titulares de las concesiones otorgadas por el Gobernador del Estado, previo cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y del título de concesión, expidiendo los documentos oficiales necesarios para acreditar el acto.

Los procedimientos enunciados en los párrafos anteriores, los llevará a cabo el Secretario de Vialidad y Transporte, previo acuerdo delegatorio del Titular del Ejecutivo.”

Como se advierte, el Acuerdo publicado en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca el 4 cuatro de septiembre de 2012 de dos mil doce se delegaron al Secretario de Vialidad y Transporte

para cumplimentar las obligaciones contenidas en el artículo 95 Bis del Reglamento Interno de la Ley de Tránsito Reformada en el Estado, esto es, faculta al Secretario citado, para RENOVAR la concesión por un término máximo de cinco años, previos requisitos establecidos para tal efecto, este último reglamento que sigue vigente; de ahí lo infundado de sus agravios.

Por otra parte señala que le causa agravios el auto recurrido, ya que el acuerdo de fecha 04 de septiembre de dos mil doce ha sido derogado por la Ley de Transporte y por la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad.

Determina que es así, porque la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, en sus artículos 72 último párrafo y 120, fracción III, prevén la figura de prórroga o renovación de las concesiones de transporte público; y el artículo 12, fracción V, establece que es atribución del Gobernador del Estado, expedir el acuerdo de prórroga o renovación.

Además de que el Acuerdo de mérito, resulta inaplicable como fundamento para negar la renovación de la concesión solicitada, porque por disposición del Transitorio SEGUNDO, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE OAXACA, en virtud de ser una disposición administrativa de menor rango que la ley y que además contiene disposiciones opuestas al artículo 12 fracción V de la Ley de Transporte del Estado.

En cuanto a este agravio es fundado, toda vez que el Acuerdo delegatorio en efecto ya fue derogado, por así señalarlo en el párrafo Segundo del Transitorio Segundo de la Ley de Transporte del Estado, que dispone:

“Las disposiciones contenidas en la presente ley, por razón de la materia prevalecen sobre las disposiciones legales y administrativas de igual o menor rango que se le opongan, aun cuando no esté expresamente señalado o previsto; o abrogadas o derogadas”

Sin embargo se torna inoperantes sus agravios, en virtud que en el Transitorio CUARTO, párrafo Segundo, de la Ley de Transporte del Estado, señala:

“Hasta en tanto se expidan los reglamentos respectivos, serán aplicables en lo conducente, las disposiciones legales vigentes en la materia, en todo lo que no contravenga lo dispuesto en la presente ley.”

Para ello, es necesario señalar el concepto de Reglamento, definición que se encuentra en la liga: <https://conceptodefinicion.de/reglamento/>, que significa:

“REGLAMENTO: es el conjunto de reglas, conceptos establecidos por un agente competente a fin de establecer parámetros de dependencia para realizar una tarea en específico. En términos gubernamentales, la constitución que es el máximo reglamento, que debe ser respetado y honrada por toda la nación, le otorga al [poder](#) ejecutivo poderes a fin de realizar administraciones legislativas y decidir los reglamentos y sus modificaciones que serán usados para controlar al [país](#).

Entendido lo anterior, el reglamento establece parámetros para realizar una tarea en específico; como en el presente caso tenemos que en el Reglamento de la Ley de Tránsito en el Estado, prescribe que el Secretario de Vialidad y Transporte está facultado prorrogar una concesión ya otorgada mediante la renovación por un término máximo de cinco años.

Es necesario analizar las disposiciones de la Ley de Transporte del Estado, si el Reglamento citado contraviene los artículos siguientes:

Artículo 72.- Las concesiones para prestar servicio público de transporte tendrán la siguiente vigencia:

...

La vigente de las concesiones podrá prorrogarse por periodos iguales, siempre y cuando permanezca la necesidad del servicio.

ARTÍCULO 120.- Son derechos de los concesionarios:

...

III.- Solicitar la prorroga o renovación de la concesión.

ARTÍCULO 12.- Son atribuciones del Gobernador del Estado:

...

V.- Expedir los acuerdos, decretos y demás disposiciones administrativas necesarias para la actualización, regulación, ordenación, modernización o suspensión del servicio público de transporte.

De la lectura de las dos primeras disposiciones refieren la vigente de la concesión y los derechos de los concesionarios; preceptos legales que no refieren a las facultades; y por ultimo refiere, de que el Gobernador es el facultado para expedir acuerdos, decretos y demás disposiciones administrativas necesarias para la actualización, regulación, ordenación, modernización o suspensión del servicio público de transporte; disposición que determina que es facultad

exclusivo del Titular del Poder Ejecutivo expedir acuerdos, acuerdos, decretos y demás disposiciones necesarias para la actualización, regulación, ordenación, modernización o suspensión del servicio público de transporte; en ninguna parte refiere relativo a la renovación de concesión, materia de la Litis; de ahí lo infundado de sus agravios.

De igual manera señala que por disposición del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca publicada el once de abril de dos mil dieciséis en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, determinó que en tanto no se expida el reglamento de la citada ley, continuará en vigor, en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley de Tránsito Reformada del Estado, en virtud de lo cual el artículo 95 Bis de dicho reglamento ha sido derogado por los artículos Segundo, Séptimo y Octavo transitorios, en virtud de que se oponen al contenido del artículo 13 fracción III de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, y del artículo 12 fracción V de la Ley de Transporte del Estado de Oaxaca, siendo que determinan que son atribuciones del Titular del Poder Ejecutivo.

En atención a lo anterior, los artículos transitorios determinan:

“TERCERO.- En tanto no se expida Reglamento de la presente Ley, continuara en vigor en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley de Transito Reformada, publicado el 31 de marzo de 1973, en el periódico oficial del Gobierno del Estado”

“SÉPTIMO.- (...)

Hasta en tanto se expida el Reglamento de esta ley, serán aplicables en lo conducente las disposiciones vigentes en la materia, en lo que no la contravengan.”

“OCTAVO.- Se derogan todas las disposiciones legales o administrativas, de igual o menor rango, que se opongan a la presente Ley.”

De los que se advierten que el primer transitorio determina que continuará en vigor el Reglamento de la Ley de Transito Reformada, publicado el 31 de marzo de 1973, en lo que no se oponga; ahora bien, toda vez que el Reglamento de la Ley citada tuvo su última reforma publicada en el periódico oficial el 22 veintidós de agosto de 2012, en el que se adicionó el artículo 95 Bis, y que a la fecha está vigente, que determina:

“ARTICULO 95 BIS.- El tiempo por el que se otorgue una concesión podrá ser prorrogado por la Secretaría de Vialidad y Transporte, mediante la renovación de la concesión por un término máximo de cinco años, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto. La Secretaría de Vialidad y Transporte, podrá autorizar las cesiones de

derechos y las transferencias de derechos por fallecimiento de los titulares de las concesiones otorgadas por el Gobernador del Estado, previo cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias y del título de concesión, expidiendo los documentos oficiales necesarios para acreditar el acto.

Los procedimientos enunciados en los párrafos anteriores, los llevará a cabo el Secretario de Vialidad y Transporte, previo acuerdo delegatorio del Titular del Ejecutivo.”

Precepto legal que es claro y preciso al señalar que una concesión podrá ser prorrogado por la Secretaría de Vialidad y Transporte, mediante la renovación de la concesión por un término máximo de cinco años, cumpliendo con los requisitos establecidos para tal efecto; esto es así, al haberse determinado en los transitorios **Séptimo y Octavo**, que señalan, que se derogan cuando contravengan y el 95 Bis del Reglamento en cuestión no es contrario al artículo 13 fracción III de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado de Oaxaca, ya que este decreta:

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

“ARTICULO 13.- El Titular del Poder Ejecutivo tendrá las siguientes atribuciones:

...

III.- Las demás que le confiera esta ley, su reglamento y demás disposiciones normativas aplicables.

De la lectura de este numeral no se advierte que exista alguna disposición en contravención, ya que no señala en forma taxativa relativo a la renovación de concesión; por lo que, la Secretaria de Vialidad y Transporte en el Estado, si tiene competencia para resolver relativo a la petición de la renovación de concesión, de acuerdo a las facultades otorgadas en el artículo 95 Bis del Reglamento de la Ley de Tránsito del Estado de Oaxaca, vigente.

Por lo anterior los preceptos legales citados en la resolución de fecha 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis por la Secretaria de Vialidad y Transporte del Estado si le otorgan facultades al citado servidor público para emitir tal actuación. En cuanto a la vigencia del acuerdo delegatorio, como ya se dijo ha quedado derogado, no obstante el Reglamento de la Ley de Transito Reformada continua vigente por las razones otorgadas, de ahí que el citado precepto 95 Bis si le otorga facultades al Secretario de Vialidad y

Transporte del Estado para emitir actos como la resolución de 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis.

A todo lo anterior se agrega que aun cuando el acuerdo delegatorio a partir de diez de diciembre del dos mil trece, ha quedado derogado, a la fecha en que la aquí recurrente presento su petición tal instrumento estaba vigente y era aplicable.

Es pertinente indicar que en la resolución de 30 treinta de noviembre de 2016 dos mil dieciséis, el Secretario de Vialidad y Transporte del Estado invoca el artículo 95 Bis de la Ley de Tránsito Reformada en el Estado, el cual no existe, sin embargo ello no afecta la fundamentación de su competencia porque posteriormente en el mismo cuerpo de la resolución si invoca el artículo 95 Bis del Reglamento de la Ley de Transito Reformada que le confiere la alegada facultad.

En estas condiciones, son **infundados** los argumentos hechos valer por el recurrente por que la determinación contenida en el recurso de queja de once de julio de dos mil diecisiete cumple con su finalidad que es la de establecer se han colmado o no las consideraciones contenidas en la sentencia definitiva y porque están dirigidos a controvertir cuestiones que no son motivos ni de la resolución sujeta a revisión ni del presente medio de defensa

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

Por las narradas consideraciones, se confirma la determinación de once de julio de dos mil diecisiete y con fundamento en los artículos 207 y 208 de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado, vigente al inicio del juicio principal, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se **CONFIRMA** la resolución de once de julio de dos mil diecisiete, tal como quedó precisado en el considerando que antecede.

SEGUNDO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE, con copia certificada de la presente resolución, vuelvan las constancias remitidas a la Cuarta Sala Unitaria de Primera Instancia, y en su oportunidad archívese el cuaderno de revisión como concluido.

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal de Justicia

Administrativa del Estado de Oaxaca; quienes actúan con la Secretaria General de Acuerdos de este Tribunal, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO ADRIÁN QUIROGA AVENDAÑO
PRESIDENTE

MAGISTRADO HUGO VILLEGAS AQUINO

Datos personales
protegidos por el
Art. 116 de la
LGTAIP y el Art.
56 de la LTAIPEO

MAGISTRADO ENRIQUE PACHECO MARTÍNEZ

MAGISTRADA MARÍA ELENA VILLA DE JARQUÍN

MAGISTRADO MANUEL VELASCO ALCANTARA

LICENCIADA SANDRA PÉREZ CRUZ
SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS